

Villa Alemana, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que comparece ante este Juzgado doña **PAULINA ANDREA CÁNEPA BELTRÁN**, chilena, abogada, cédula nacional de identidad N° 16.776.342-1, domiciliada en Carlos Condell N°6, departamento 43, sector Miraflores, Viña del Mar, quien deduce demanda en procedimiento de tutela de derechos fundamentales, con ocasión del despido, en contra de su ex empleador, **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA**, persona jurídica de derecho público, RUT N° 69.061.500-2, legalmente representada por su Alcalde, don JOSÉ SABAT MARCOS, cédula nacional de identidad N° 5.125.499-6, ambos domiciliados en calle Buenos Aires N° 850, comuna de Villa Alemana, con la finalidad que esta sea acogida en todas sus partes, atendida las fundamentaciones de hecho y de derecho que expone.

Indica que ingresó a prestar servicios el 22 febrero del año 2016 para la demandada, con el cargo de Abogada del Programa Centro de la Mujer SERNAMEG de Villa Alemana, programa psico- social y jurídico, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio. El programa corresponde a un convenio entre la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, su ex empleadora, y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, el cual se encuentra enfocado en la prevención, atención y reparación integral de la violencia contra las mujeres.

La jornada se componía de 45 horas semanales, en la cual debía prestar cobertura a las comunas de Villa Alemana, Quilpué y Limache y a partir del año 2018 también se agregó la comuna de Olmué, prestando representación judicial a usuarias, consultas jurídicas, y preparación de causas e informes mensuales de registros de coberturas. Esta, sin considerar las horas extras, en las cuales, debía preparar audiencias y atenciones de público. Labores que habría desempeñado durante todo el periodo sin reclamos, amonestaciones, ni problemas de ninguna especie, sino todo lo contrario, con un significativo aumento de funciones, hasta el momento del despido el día 31 de junio de 2019.

Su última remuneración mensual ascendía a \$971.074.- (novecientos setenta y un mil setenta y cuatro pesos), cantidad que constituye la base de



cálculo de las indemnizaciones, incrementos y prestaciones que demanda. Por otra parte, todos los meses le asignaban adicionalmente viáticos por costos de movilización los cuales en promedio ascendían a \$50.000.- (cincuenta mil pesos) o sumas mayores a ésta.

La jornada de trabajo que debía que cumplir era la misma de los demás funcionarios en calidad de contrata o planta municipal, es decir, de lunes a jueves de 8:30 hrs. a 14:00 hrs. y de 15:00 hrs. a 17:30 hrs y los días viernes de 8:30 hrs a 14:00 hrs. y de 14:35 hrs a 16:30 hrs.

Expresa que, en muchas ocasiones, se le solicitó, a través de providencias del propio Alcalde y Dirección, como también informalmente, por parte de su jefatura directa, el cumplimiento y llegada a la hora de dicha jornada horaria, como también cumplir horarios extras, obligada a asistir a jornadas y eventos municipales de distinta naturaleza a sus funciones. Por otra parte, cuando entró a trabajar a la oficina, tenía la obligación de firmar un libro de asistencia.

Refiere que, no obstante el contrato de trabajo y sus constantes renovaciones que celebró con la demandada corresponde al sistema de contrato a honorarios, pero, en realidad, dichos servicios configuraron una efectiva relación laboral sujeta a vínculo de subordinación y dependencia. Señala que nunca fue contratada como funcionario municipal según lo dispuesto en la Ley 18.883, ni tampoco a algún estatuto especial.

En efecto, su relación laboral con la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana comienza el día 22 de febrero del año 2016, fecha en que asumió el cargo de Abogada del Programa Centro de la Mujer de Villa Alemana, con cobertura en las comunas de Quilpué, Villa Alemana y Limache, programa psico-social- jurídico, enfocado en la prevención, atención y reparación integral en violencia contra las mujeres, suscrito entre el Servicio Nacional de la Mujer de Valparaíso y la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, labores que ejecutó bajo subordinación y dependencia de ésta última, hasta junio del presente año, tras ser desvinculada vulneratoria e injustificadamente, sin previo aviso.

Las funciones que debía cumplir y que estaban estipuladas en su contrato, eran las siguientes:

Administración General:



- Participar en el proceso de planificación y diagnóstico de violencia contra la mujer.
- Colaborar en la confección de diagnóstico territorial de violencia contra la mujer.
- Participar en las reuniones técnicas de equipo.

Prevención:

- Colaborar en acciones del programa de prevención que estén asignadas al Centro de la Mujer.

Atención:

- Representar judicialmente en las causas de violencia intrafamiliar a las mujeres usuarias en el centro de la mujer.
- Aportar en diseño de las intervenciones grupales, en conjunto con la dupla psicosocial.
- Realizar acciones de recepción informada, para acogida, atención, orientación e información jurídica a las usuarias.
- Participar activamente en el proceso de diagnóstico y confección de planes integrados de intervención de las usuarias, así como en la realización de talleres jurídicos.
- Brindar atención a usuarias de manera responsable, considerando un abordaje integral, diagnóstico, plan de intervención, evaluación de éste y acciones de seguimientos de las usuarias.

Redes:

- Gestionar y realizar las derivaciones pertinentes a las usuarias que sean atendidas por alguna de las prestaciones del Centro de la Mujer.
- Asesorar y acompañar a los profesionales del Centro de la Mujer en actividades de red de coordinación intersectorial y apoyar actividades de prevención del centro.

Registro:

- Mantener un sistema de registro integrado de las atenciones jurídicas, según formato que destina SERNAMEG.

Subrogación:

- Subrogación de la coordinadora del Centro de la Mujer Villa Alemana, en el periodo de permisos o vacaciones de ésta.



Además de las funciones propias de su oficina, por orden del Alcalde, del Director de Desarrollo Comunitario y de su jefatura directa, se volvió una mala práctica obligarla a participar en actividades fuera de mis funciones y competencias, labores que realicé bajo la orden antes suscrita, tanto dentro como fuera de mi jornada horaria. Señala que estas órdenes las tuvo que acatar, ante la necesidad de trabajo y el legítimo temor de perderlo, con la finalidad de no producir problemas ante la exigencia imperiosa del edil y mi jefatura directa.

Respecto de las funciones adicionales mencionadas, el año 2016 se le impuso, por mi calidad de abogada, la obligación de prestar servicios para incentivar la participación de los vecinos del municipio, para lo cual, me capacité y desempeñé como Ministra de Fe de lo que fueron los Presupuestos Participativos de la comuna de Villa Alemana (según consta en boleta de prestación de servicios de agosto de 2016).

En el mismo sentido, se le ordenó asistir a otros eventos Municipales en forma obligatoria, tales como cuentas públicas, gobiernos en terreno y otros eventos municipales. Incluso, en un par de ocasiones, el Director de Desarrollo Comunitario le solicitó atender, bajo favor personal, a personas de su confianza, en materias que no eran propias de mis funciones, sabiendo la carga y poca flexibilidad horaria que me reportaba la agenda del Centro de la Mujer, entre preparación y asistencia a audiencias, atenciones a usuarias, charlas y reuniones de oficina y de red. A mayor abundamiento, se le obligaba a asistir a actividades extra programáticas, como asados, comidas y otros en ocasiones fuera del horario, que más aún debían ser financiadas por ella. Respecto a esto, su jefatura directa le decía que era obligatorio asistir, porque ahí se veía el apoyo al Alcalde y la gestión del DIDECO, situación por la que en varias ocasiones, incluso con sueldos impagos, tuvo que asistir por temor a perder mi empleo.

Por otra parte, durante los años 2016 y 2017, los contratos contenían todos los derechos y obligaciones que tenía cada trabajador a honorarios del equipo, desde la hora de inicio de la jornada laboral, hasta días de permiso por concepto de reposo. A partir del año 2018, se nos señala que, por la gran cantidad de demandas presentadas por parte de trabajadores a honorarios hacia el Municipio, se eliminarían todo tipo de beneficios estipulados en los contratos, sin perjuicio que, todas las obligaciones con el mismo se mantenían. Por tanto, los contratos de



los años 2018 y 2019, no contienen los derechos reconocidos los años anteriores, sólo se describen las obligaciones y monto de las remuneraciones.

Durante los años 2017 y 2018, aumenta su carga laboral y su salud física y emocional también comienza a decaer ese año, debido al estrés laboral que sufría, por el constante retraso en el pago de su sueldo. Es en ese momento, cuando comienzan los acosos por parte de la Coordinadora del Programa, Johana Torres Sepúlveda, dados sus reclamos ante esta irregular situación, que se tornó muy habitual durante mucho tiempo. Eran constantes los retrasos en la tramitación de los Decretos Alcaldicios que aprobaban las solicitudes de contratos. Lo anterior implicaba que los pagos de las remuneraciones del equipo profesional, por concepto de honorarios, se retrasaban considerablemente, prestando servicios profesionales durante todo el verano (enero- febrero y fines de marzo), todos estos meses sin sueldo. No obstante lo anterior, siempre siguió cumpliendo de igual forma su trabajo, sin tener quejas o reclamos de ningún tipo, ya que, las funciones de abogada del Centro de la Mujer, debían realizarse de manera ininterrumpida, de lunes a viernes y, en ocasiones, los días sábado, por la naturaleza de los servicios prestados, pues, debido a la sensibilidad de la temática, las atenciones de usuarias, audiencias programadas y situaciones de emergencia, no se suspendían. Sumado esto, el hecho de estar trabajando ante la demora de los decretos alcaldicios y contratos por dos o tres meses, no sólo los mantenían sin sueldo, sino que igualmente provocaba el mismo tiempo de retraso en los pagos por concepto de viáticos por movilización, lo cual encarecía aún más su trabajo, al tener que trasladarse por toda la provincia, bajo su propio costo. Este tema al igual que el retraso en los pagos, lo reclamó en varias ocasiones dejando constancia de dichos reclamos, en los libros de acta.

El año 2018, se produce un incremento en la carga laboral, producto del cierre del Programa del Centro de la Mujer de la comuna de Quillota, lo que implicó que el Centro de la Mujer de Villa Alemana extendiera su cobertura, incorporando prestación de servicios a la comuna de Olmué. De esta forma, me convertí en la única abogada del Centro de la Mujer, para toda la Provincia del Marga Marga.

Agrega que las prestaciones y servicios profesionales no se interrumpían, debiendo asumir, de igual forma, la atención de usuarias e, incluso,



personalmente, costos de movilización y materiales para asistir debidamente a las audiencias fijadas por Tribunales, gestiones en fiscalía y, en definitiva, debiendo asumir, de iniciativa propia, los costos económicos necesarios para la adecuada defensa de mujeres en situación de vulnerabilidad y violencia. Incluso tuvo que subrogar a la Coordinadora en periodos de permisos de ésta, y estar a la cabeza de la oficina, dirigiendo los consejos técnicos y el área administrativa.

Añade que al momento de concurrir a firmar el contrato para el periodo laboral correspondiente al año 2018, se enteraron que éste no tendría vigencia anual como los anteriores, sino que, esta vez, el contrato tendría tan sólo una duración semestral para todos los miembros del equipo, con vigencia 01 de enero de 2018 al 30 de junio del mismo año. Asimismo, por la gran cantidad de demandas hacia el Municipio por parte de ex trabajadores a honorarios, se eliminaron todos los derechos que contemplaban los contratos en años anteriores (2016- 2017).

Lo anterior le provocó un enorme desgaste emocional sentimientos de ansiedad e incertidumbre, al no saber qué pasaría con su contrato en el segundo semestre, en cuanto a la continuidad de mi trabajo. Situaciones que, sí se encontraban reguladas en los años anteriores, en los contratos firmados de los periodos que van de febrero de 2016 a diciembre de 2017. Señala que vivió vulneraciones laborales al interior del Municipio de Villa Alemana, como el cambio de las estipulaciones de su contrato, que existían reiterados retrasos en los pagos de las remuneraciones y debió escuchar comentarios burlescos y amenazantes de parte del Director de Desarrollo Comunitario ante nuestros reclamos. Como por ejemplo, al señalarle su molestia y de otros compañeros, nos dijo: “Ustedes tienen que venir a trabajar felices al Municipio, hay cuánta gente sin pega”. Esta situación, personalmente, la sintió como una amenaza.

Adicionalmente al contrato, este año fue obligada a firmar un anexo, el cual señalaba que el Municipio no se haría cargo del pago de las cotizaciones previsionales, debiendo asumir la profesional, el pago de las mismas. Las boletas de honorarios se confeccionaron durante el mes de marzo, por tanto, la entrega de cheques para el pago de los servicios profesionales también fue extemporáneo a los meses de enero y febrero, repitiendo la situación de vivir todo el verano sin pago.



Indica que los acosos de parte de su jefatura directa del Centro comenzaron a ser más recurrentes y sus compañeros de oficina le decían que existía una suerte de “fijación hacia su persona”, producto de mis reclamos por los atrasos en los pagos de los sueldos, situación que molestaba a la Dirección y a otras jefaturas mayores de la Municipalidad. Por otra parte, también existía una suerte de “envidia”, por el sueldo correspondiente a mi cargo de abogada, que era un poco más alto que el de otros profesionales, por ello me asignaban arbitrariamente más trabajo y funciones que el resto de los funcionarios.

Alega que las situaciones relatadas ocasionaron efectos colaterales para su salud, tanto a nivel físico como psíquico. Ya en el segundo semestre, comienzo a sentir toda la carga y presión que se venía acumulando, razón por la cual me vi en la obligación de acudir de urgencia, el 5 de Octubre de 2018, al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, por episodios de ansiedad, bruxismo, crisis de pánico, y crisis nerviosa, que, en algún momento, me produjeron una leve parálisis facial temporal, siendo medicada con psicofármacos como Clotiazepam 10 mg., siendo atendida por un médico cirujano y traumatólogo oral maxilofacial. Que en marzo del presente año busqué ayuda de un psiquiatra en Viña del Mar, una vez que cuento con el pago de mis remuneraciones de los meses que se encontraban pendientes. El día 28 de marzo de 2019, concurrí a REDGESAM de Viña del Mar, ubicado en 12 Norte N° 785, oficina 1201, de la comuna señalada, siendo atendida por la médico integral Janeth Ávila Paredes, quien, junto con prescribirme ansiolíticos, sugiere reposo laboral por 10 días, a partir del 29 de marzo de 2019.

Añade que, tras su llegada del reposo, se vuelve a repetir la situación del año 2018, en la cual la Coordinadora del Programa del Centro de la Mujer de Villa Alemana, doña Johana Torres Sepúlveda, convoca a reunión de equipo, manifestando el descontento por una “supuesta baja en la productividad laboral” e “incumplimientos en horario de entrada”, razón por la cual comunica que se lo hará saber a los superiores.

Expresa que en una ocasión, la Coordinadora del Centro de la Mujer de Villa Alemana, Johana Torres Sepúlveda, con la sola finalidad de atormentarla y perjudicarla, se tomó la atribución de ingresar a su oficina y revisar carpetas legales en su ausencia, en las cuales se contenía información confidencial y



sensible de cada una de las usuarias del centro. Posterior a este hecho, la amenaza con realizar informes que le acusen de una supuesta baja productividad.

El mes de abril de 2019, se dirigió a entrevistarse con el Director de Desarrollo Comunitario, don Nelson Estay Molina, para dar cuenta del estado de salud que le aquejaba y explicarle las necesidades del área jurídica de la oficina. Le solicitó permiso por un mes sin goce de remuneraciones, para someterse a exámenes de salud. El Director de Desarrollo Comunitario, don Nelson Estay Molina, accedió a mi solicitud, indicándome que se reincorporara a sus labores en el mes de junio. Sin embargo, antes de salir con el permiso otorgado, me presionó a firmar una Carta de Renuncia Voluntaria. Así, el día 30 de abril procedió a firmar una carta de renuncia voluntaria, la cual, correspondía a un documento con formato preestablecido, donde debía consignar la fecha de suscripción de contrato de honorarios 2019, para tener a bien y considerar mi renuncia partir de esa misma fecha. Fue así que, durante el mes de mayo de 2019, me ausenté de mis actividades laborales en el Municipio para ocuparme de mi salud física y psíquica.

Indica que en el mes de junio de 2019 vuelve al trabajo, mes en el que continúan los acosos por parte de la coordinadora hacia su persona. A casi tres semanas de terminar el mes, la coordinadora realiza una reunión técnica de equipo y le informa que su contrato de trabajo no se renovará, por una supuesta falta de productividad y que estaba despedida. Estima que dicha situación que no correspondía, ya que, durante años trabajó sobre las funciones encomendadas y más aún, el Director de Desarrollo Comunitario le habían indicado que volvería a su trabajo luego del permiso. Sobre esto último dejó constancia en el libro de actas de reuniones técnicas, sin embargo la coordinadora omite responsabilidades diciéndole que debe reclamar directamente a la DIDECO o a SERNAMEG, y comienza a desvalorizar y desprestigiar su trabajo sin argumento técnico alguno, y con mucha ofensa personal, tildándola de problemática, siendo que sus reclamos solamente fueron siempre por solicitar lo justo, que era el pago de mi sueldo a tiempo y mayor equilibrio en las funciones designadas. Agrega que ni la Municipalidad de Villa Alemana, ni sus unidades, Centro de la Mujer o Dirección de Desarrollo Comunitario cuentan con instrumentos de medición o evaluación de productividad, para poder tomar una decisión con los fundamentos como la que se atribuyen las jefaturas al despedirla. Añade que durante su periodo de trabajo, se



cumplieron todas las metas solicitadas por SERNAMEG, por lo tanto y por las causas anteriormente señaladas, es evidente que mi despido fue atribuido a otras condiciones de discriminación arbitrarias, que no sólo vulneraron mi integridad psíquica, sino que también mi honra personal y profesional y mi derecho a trabajar en condiciones dignas.

Refiere que ha tenido que seguir tratamientos psicológico y psiquiátrico, debido al daño emocional ocasionado hacia su persona ante la psicóloga Alejandra González Swekes, del médico Psiquiatra, Dr. Patricio Péndola Sáez, ambos del centro médico "Psiquemédica"; y por otra parte de mi psicóloga terapeuta personal Carolina Oliveros.

Cita normas legales pertinentes y pide que tenga por interpuesta denuncia por vulneración de derechos fundamentales, durante la relación laboral, con ocasión del despido injustificado, en contra de su ex empleador, acogerla y en definitiva, dar lugar a ella declarando:

1.- Que la relación que ligaba a las partes era de carácter laboral, amparado por las presunciones del artículo 1 ° y 8 ° inciso primero del Código del Trabajo.

2.- Que, durante la relación laboral y, con ocasión del despido injustificado, fue objeto, por parte de la denunciada, de actos vulneratorios de derechos fundamentales, en particular, de la garantía de indemnidad.

3.- Que el despido es injustificado y vulneratorios de la garantía de integridad psíquica y de su derecho a la honra y aduce actos de discriminación arbitraria.

4.- Que, como consecuencia, la denunciada debe pagarle las siguientes indemnizaciones:

a) Indemnización sustitutiva de aviso previo, ascendente a \$971.074.- (novecientos setenta y un mil setenta y cuatro pesos).

b) Indemnización por años de servicio \$2.913.222.- (dos millones novecientos trece mil doscientos veintidós pesos).

c) Más el recargo legal del cien por ciento, conforme a lo señalado en el artículo 168 inciso 5 del Código del Trabajo \$2.913.222.- (dos millones novecientos trece mil doscientos veintidós pesos).

d) Indemnización adicional del inciso tercero del artículo 489 del Código del Trabajo, equivalente a once meses de mi última remuneración, ascendente a



\$5.826.444.- (cinco millones ochocientos veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos).

e) Feriado legal y proporcional, por el periodo laboral comprendido entre los años 2016 y 2019, equivalente a \$2.427.915.- (dos millones cuatrocientos veintisiete mil novecientos quince pesos), que se desglosa de la siguiente manera:

- Feriado Legal de 45 días de vacaciones pendientes
\$2.184.915.- (dos millones ciento ochenta y cuatro mil novecientos quince).

- Feriado Proporcional por 4 meses, equivalente a \$242.768.- (doscientos cuarenta y dos mil setecientos sesenta y ocho pesos)

5.- Cotizaciones previsionales por todo el periodo que duró la relación laboral.

6.- En subsidio, que la demandada sea condenada a pagarme las sumas que U.S. determine, de acuerdo con el mérito del proceso.

7.- Que todas las sumas adeudadas deben serlo con reajustes e intereses, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

8.- Las costas de la causa.

En subsidio de lo principal, en el primer otrosí de la demanda, impetra acción de nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales, por las consideraciones que indica, en contra de la misma demandada de lo principal, por los hechos contenidos en la acción principal del libelo pretensor, agregando que fue despedida verbalmente, además, el aviso de despido es carente de las formalidades legales que debe tener cualquier despido, debido a que, aplicando el principio de la primacía de la realidad, sus labores se desarrollaron con habitualidad durante más de tres años, con una evidente relación de subordinación y dependencia.

En la especie, cumplía horarios habituales y definidos, por los cuales, incluso, firmó libros de asistencia y se ejercía un estricto control de entrada y salida. Estuvo bajo el mando de jefaturas directas, realizando funciones, por orden de éstas.

Respecto de lo anterior, invocando el principio de primacía de la realidad, solicita la nulidad del despido, considerando que realizó funciones de gran importancia para la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, las que iban más allá de sus funciones asignadas, más bien, eran las propias de un funcionario en calidad contractual contrata o planta, ya que, sumado a esto, tuvo la



responsabilidad de liderar equipos de trabajo, representar en muchas ocasiones a la Municipalidad e, incluso, estar a cargo de alumnos en práctica profesional.

SEGUNDO: Que dentro de plazo legal comparece ante este tribunal don Jorge Héctor Torres Jaña, Abogado, Director (s) del Departamento Jurídico de la Ilustre Municipalidad De Villa Alemana y en su representación, Corporación de Derecho Público que a su vez es representada legalmente por su Alcalde Don José Sabat Marcos, todos domiciliados para estos efectos en Calle Buenos Aires N° 850, ciudad de Villa Alemana, evacuando contestación en los términos que se expondrán.

En primer lugar, impetra la excepción de falta de legitimación activa de la acción de denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, con ocasión del despido. La demandante celebró con fecha 07 de Marzo de 2019, un contrato a honorarios con mi representada, cuyo objeto era el cumplimiento de ciertas tareas específicas para el Programa Centro de la Mujer (Línea de Atención) "SERNAMEG", individualizadas en el propio contrato señalado.

Dicho contrato tenía vigencia hasta el día 30 de Junio del año 2019. En efecto, la Cláusula Cuarta señala:

“CUARTO: Se deja constancia, que los servicios a que se refiere este contrato, comenzaron a ejecutarse con fecha 01 de enero de 2019, y se extenderán hasta el día 30 de junio del mismo año”.

No obstante, con fecha 30 de Abril de 2019, la demandante presentó carta de renuncia voluntaria dirigida al Sr. Alcalde, informando que presentaba su renuncia a contar de esa misma fecha por motivos personales.

Atendido lo anterior, mediante el Decreto Alcaldicio N° 689 de fecha 20 de Mayo de 2019, se aceptó a contar del 30 de Abril de 2019, la renuncia voluntaria presentada por doña Paulina Cánepa Beltrán, al contrato a honorarios aprobado mediante el Decreto Alcaldicio N° 356 de fecha 14 de Marzo de 2019.

Como aparece de manifiesto, la demandante renunció voluntaria y expresamente a su contratación a honorarios, dejando de prestar servicios profesionales a contar del 30 de Abril de 2019.

Atendido lo señalado en los numerales precedentes, la demandante carece de legitimación activa para ejercer la acción intentada en el libelo de autos en relación a los periodos anteriores al 30 de Abril de 2019.



En este sentido, la demandante alega una supuesta vulneración de derechos fundamentales, relatando una serie de hechos efectuados con anterioridad a su renuncia voluntaria, no obstante, la demandante renunció expresamente al vínculo jurídico existente con el Municipio y prueba de ello es la carta de renuncia de fecha 30 de Abril de 2019, y el propio Decreto Alcaldicio N° 689 de 2019, que acepta dicha renuncia.

Lo anterior, demuestra que en la especie existió una renuncia expresa, lo que constituye la voluntad de la demandante, manifestación del principio de la autonomía de la voluntad.

En subsidio, contesta la demanda de naturaleza laboral, interpuesta en autos por parte de doña PAULINA CÁNEPA BELTRÁN, en contra de su representada, respecto de los siguientes aspectos que ella abarca: A) Vulneración de Derechos Fundamentales, B) Cobro de Indemnizaciones, solicitando desde ya su íntegro rechazo, en mérito de los siguientes fundamentos:

Rechaza en forma total y absoluta la demanda de autos, respecto de todos los aspectos que ella abarca y, en particular, los siguientes: A) Vulneración de Derechos Fundamentales, y B) Cobro de Indemnizaciones.

Declara en primer lugar, su íntegro y total rechazo a la demanda de autos, por estimar que no existe objetiva ni subjetivamente intención de su representada de incurrir en conducta alguna lesiva respecto de doña Paulina Cánepa Beltrán; y en particular, en conductas que vulneren sus derechos fundamentales, en los términos consagrados en el Artículo 485 del Código del Trabajo, y en especial, los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 1 y N° 4 de la Constitución Política de la República, que como señala la demandante, implicaría vulneración a su integridad psíquica, a su vida privada y a su honra.

Refiere que actuó dentro de la esfera de sus competencias y facultades, conforme dicho estándar de conducta, no ha instigado, promovido o aceptado ni expresa ni tácitamente conductas al margen de la ley y, en especial vulneradoras de derechos fundamentales de sus trabajadores.

La demanda de autos, conforme lo dispone el inciso primero del artículo 485 del Código del Trabajo, relaciona las garantías constitucionales que menciona con la actitud que a su respecto tiene un empleador: los derechos que resulten lesionados, deben serlo “en el ejercicio de las facultades del empleador”.



Es más, en el inciso tercero del mismo artículo 485, ya citado, se detallan las actuaciones del empleador objeto de tutela laboral. Es así que prescribe la norma que se entenderá que las facultades que la ley le reconoce al empleador, afectan o lesionan los derechos y garantías de los trabajadores, cuando dichas facultades limitan el pleno ejercicio de ellas, sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. Puede apreciarse que la ley razona sobre el ejercicio de facultades del empleador; o sea, cuando el empleador decide, resuelve o toma decisiones.

Sostiene que todas las decisiones que la I. Municipalidad de Villa Alemana dispuso respecto de doña Paulina Cánepa Beltrán, estuvieron fundadas en el ordenamiento jurídico vigente.

Que correspondería a la demandante probar la vulneración de los derechos que alega y las pretensiones que por tal concepto demanda.

Respecto a los hechos que la demandante declara como constitutivos de vulneración de sus derechos fundamentales. Sobre el particular, se desprende inequívocamente de ellos, que están plagados de imprecisiones, meros prejuizgos e indicaciones imposibles de contestar, ya que tienen un carácter eminentemente subjetivo, derivado de la naturaleza emotiva de las mismas.

Sobre el despido injustificado niega la existencia de una relación laboral entre la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana y la demandante doña Paulina Cánepa Beltrán.

Entre dichas partes, sólo ha existido una relación contractual de derecho civil, específicamente: diversos contratos a honorarios. Es la propia demandante quien reconoce la existencia de una serie de contratos a honorarios, suscritos con la I. Municipalidad de Villa Alemana.

El primero de ellos fue firmado el 15 de Marzo de 2016, posteriormente, con fecha 30 de Abril de 2019, la demandante presentó una carta de renuncia voluntaria a su contratación a honorarios, a contar del 30 de Abril del presente año.

Atendido lo anterior, mediante el Decreto Alcaldicio N° 689 de fecha 20 de Mayo de 2019, se aceptó a contar del 30 de Abril de 2019, la renuncia voluntaria presentada por doña Paulina Andrea Cánepa Beltrán, al contrato a honorarios aprobado mediante el Decreto Alcaldicio N° 356 de fecha 14 de Marzo de 2019.



Como aparece de manifiesto, la demandante renunció voluntaria y expresamente a su contratación a honorarios, dejando de prestar servicios profesionales a contar del 30 de Abril de 2019.

Posteriormente, atendido a que el Municipio requería contar con los servicios profesionales de la demandante para el cumplimiento de ciertas tareas específicas, es que con fecha 13 de Junio de 2019, se celebró un nuevo contrato a honorarios entre el Municipio y doña Paulina Cánepa Beltrán, contratación cuya vigencia se extendió desde el día 01 de Junio de 2019 hasta el día 30 de Junio del mismo año.

Se hace presente, que la contratación de la demandante mediante contratos a honorarios tenía por objeto la a prestación de servicios específicos para la Municipalidad en el “Programa Centro de la Mujer (línea de Atención) SERNAMEG”, en virtud del Convenio de Continuidad, Transferencia de Fondos y Ejecución para la ejecución del Dispositivo Centro de la Mujer del Programa de Atención, Protección y Reparación en Violencia Contra la Mujeres, celebrado entre el Municipio y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (en adelante “SERNAMEG”).

Cabe señalar que, a diferencia de lo señalado por la demandante, no es efectivo que el día 30 de Junio de 2019, se le haya “despedido de forma vulneratoria e injustificadamente”.

Expresa que la demandante, conforme a su último contrato de prestación de servicios a honorarios, se le contrató para prestar servicios específicos para la Municipalidad en la Dirección de Desarrollo Comunitario como abogada del Centro de la Mujer, cuya vigencia se extendió al día 30 de Junio del año 2019.

En este sentido, no hubo un “despido”, sino que el contrato de prestación de servicios a honorarios se extendió en su vigencia hasta el día 30 de Junio de 2019. Entonces, no hay un despido o actuación alguna del Municipio poniendo fin a la relación contractual, sino que sólo se observaron los efectos normales del cumplimiento de un contrato civil.

Reconoce que la actora celebró una serie de contrataciones a honorarios con su representada, y que el servicio adoptó la opción de no celebrar una nueva contratación a honorarios con la señora Cánepa, lo que corresponde a una



facultad exclusiva de la Municipalidad, en el ámbito del ejercicio legítimo de sus derechos y la libertad contractual.

En cuanto a los actos vulneratorios alegados, niega los hechos alegados por la contraria sobre supuestos actos de acoso y amenazas dentro del Centro de la Mujer. En este sentido, no existe antecedente alguno que acredite las afirmaciones efectuadas por la demandante ni existe acto alguno por parte del Municipio que pueda ser considerando causante de supuestas crisis nerviosas.

Sin embargo, las circunstancias expuestas de forma reiterada en la demanda no son determinables para atribuir responsabilidad a mi representada ni constituyen indicios de afectación de derechos fundamentales.

Por lo demás, no se puede perder de vista que lo alegado mediante una denuncia de tutela laboral dice relación con una posible vulneración ocasionada al momento del “despido”, no obstante, la demandante alega circunstancias personales que no pueden ser atribuidas a su prestación de servicios para el Centro de la Mujer. En este sentido, no se puede dejar de mencionar que la demandante se encontraba terminando su curso de Magister en Derecho. Agrega que la demandante nunca dio aviso de sus problemas de salud ni acompañó licencia médica por enfermedad laboral.

Alega que no existe fundamento alguno que permita sostener que el Municipio ha actuado vulnerado los derechos alegados por la demandante y afectando su derecho de indemnidad, por cuanto no ha existido ningún tipo de represalia a la demandante ante el ejercicio de la presente acción, ni ha presentado reclamo alguno ante la Inspección del Trabajo o ante la Contraloría General de la República.

Reitera que la demandante no fue despedida sino que el servicio adoptó la opción de no celebrar una nueva contratación a honorarios con la señora Cánepa, lo que corresponde a una facultad exclusiva de la Municipalidad, en el ámbito del ejercicio legítimo de sus derechos y la libertad contractual.

Por lo expuesto pide que se rechace la denuncia por vulneración de derechos y cobro de prestaciones, con costas.

En el segundo y tercer otrosí contesta demanda subsidiaria por despido injustificado y cobro de prestaciones laborales, deduciendo excepción de falta de legitimidad activa, reproduciendo para tales efectos, por economía procesal y en lo



que sea pertinente, las argumentaciones expuestas, y en su tercer otrosí contesta la demanda reproduciendo las argumentaciones, pidiendo el rechazo de la misma.

Finalmente opone excepción de prescripción respecto del pago de feriado legal y proporcional.

TERCERO: Que con fecha 30 de octubre de 2019, se celebró audiencia preparatoria de juicio y llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo, en dicha audiencia la parte demandante procedió a evacuar el traslado respecto de las excepciones perentorias, y respecto a la excepción de incompetencia se resolvió en dicha audiencia, siendo rechazada.

CUARTO: Que en dicha audiencia preparatoria se fijaron los siguientes hechos a probar por las partes:

1. Efectividad que la demandante prestó servicios personales bajo vínculo de subordinación y dependencia para el demandante, entre el 22 de febrero de 2016 y el 30 de junio de 2019. Tareas para que fue contratada la demandante.

2. En tal caso, circunstancias en que se produjo el término de la relación laboral.

3. En el evento de existir despido, efectividad que la demandada afectó la garantía de indemnidad de la demandante, el derecho a la integridad psíquica y el derecho a la honra del trabajador, con ocasión de su despido.

4. Monto de lo retenido por concepto de honorario y de lo devuelto en la operación renta.

QUINTO: Que en la audiencia de juicio se rindió la siguiente prueba por la parte demandante, la cual, por solicitud de ambas partes, se autorizó alterar el orden legal de rendición.

I.- Confesional:

Comparece ante estrados el Alcalde subrogante don Jorge Omar Jorquera Ortiz, cédula de identidad N° 9.235.263-3, Arquitecto de la Dirección de Obras Municipales de Villa Alemana, exhibiendo delegación de poder del Alcalde, representante legal de la demandada, quien ante las preguntas de absolución señaló:

Que conoce a la demandante, pero no la conoce personalmente, sabe donde trabajó, trabajó en la oficina de la mujer, pertenece al departamento de



dirección de desarrollo comunitario. Ella estaba por convenio por SEGNAMEG, estaba a honorarios. Que su calidad del contrato era a honorarios, profesional.

Esa unidad del centro de la mujer, preguntada si operaba solo en Villa Alemana, expresa que estaba en el municipio, y operaba para otras comunas de la provincia.

Preguntado por el convenio del municipio, ¿qué beneficios tenía?, SEGNAMEG ofrecía recursos por programas que ofrecía, y el municipio podía dar atención a mujeres por Violencia Intrafamiliar o situaciones similares.

Interrogado por el periodo trabajado, desde 2016 a 2019, meses: mayo o junio 2019, el ingreso no lo recuerda. Que las comunas beneficiadas, eran Limache, Olmué y Quilpué.

Preguntado si la demandante trabajó sujeta a horario, no tiene ese antecedente. Consultado por el cargo, indica que era abogada en la oficina de la mujer, los servicios era de asesoría legal a las personas que lo requerían en oficina de la mujer.

A la pregunta de cuantos abogados trabajan actualmente, 2 o 3, no tiene el dato exacto. Y cuando ella estaba no tiene el dato exacto.

Preguntado por la encargada de esa unidad, señala que no sabe quién es, como alcalde subrogante es esporádico. El encargado de desarrollo comunitario se llama Nelson Estay.

Preguntado si hoy los abogados que trabajan allí están todos en Villa Alemana, responde que trabajan en la oficina, y trabajan solo para la oficina de la mujer y no para el resto del municipio.

Expresa que no sabe si tenían libro de asistencia, tampoco sabe si llevaban libro de actas de reuniones.

La demandada solicita que el absolvente aclare respecto al convenio SERNAMEG, explica que el convenio confiere recursos al municipio, y éste compromete espacio físico y contratación a honorarios de profesionales.

II.- Testimonial:

1.- Comparece don **Rey Jaime Rivera Gallardo**, cédula de identidad N° 14.282.638-0, funcionario judicial, quien legalmente juramentado señala:

A las preguntas de la demandante, que conoce a las partes, a doña Paulina Cánepa, y a la I. Municipalidad de Villa Alemana. Ella era abogada jefe



cuando el testigo hizo la práctica en el centro de la mujer de Villa Alemana, y atendía a la provincia de marga-marga. Entiende que dependía el municipio.

Conoció a la actora en el segundo semestre de 2016, entre los meses de julio a diciembre.

Le consta porque estaba en dependencias del edificio municipal en Maturana y dependían de Paulina, ella era abogada jefe de centro de la mujer, atendía público y patrocinaba en materia penal y familia en VIF, en la provincia de marga marga, Limache y Quilpué.

Ella era la única abogada y también realizaba funciones para el municipio, en DIDECO, en presupuestos participativos, tuvo que hacer esas labores aunque no eran parte de la oficina.

Preguntado por el horario, refiere que de Lunes a Viernes de 8:30 am a 5:30 pm y viernes hasta las 4:30 pm.

A la pregunta de si firmaba libro o había libro cuando llegaba, el no recuerda. Refiere que Paulina laboraba en tribunales en Limache, Garantía y Familia, en Villa Alemana y Quilpué, y cumplía horario en Villa Alemana, en calle Maturana.

Preguntado por quien dirigía el centro de la mujer, dice que la coordinadora Natalia, luego Yohana Torres, que en esa época no era, después cuando se fue ella fue la coordinadora y jefa.

Respecto a los presupuestos participativos: preguntado si era función del testigo, dice que no, solo de doña Paulina. Y se lo ordenaba DIDECO, de la municipalidad.

Entiende que la demanda es por tutela por vulneración de honra por jefatura y desprestigios por personas acosadas, la demandada se lo dijo, en abril de 2019 la encontró en tribunal, la salud y conversó que estaba muy agotada por todo el trabajo y problemas de su oficina. Que su jefa hablaba mal de ella y su trabajo, se veía afectada y demacrada. Que veía un psicólogo y médico, en julio la ve y le dice que la echaron, y lloró, se veía afectada.

Expresa que veía que al personal podían pasar 3 meses y no les pagaban, por problemas de firmas, por el encargado municipal de pagos.

En cuanto a la carga de trabajo, en 2016, en 3 comunas, hasta 5 audiencias en el día, o reprogramar, estando sólo él como postulante.



Interrogado por la demandada, expresa que actualmente trabaja en Petorca, la señorita Paulina era abogada jefe de la práctica, cuando estuvo había una que estaba saliendo, y estuvo 3 a 4 meses solo, luego llegó otro postulante. Él asistía a audiencias en familia, en VIF con la abogada o a veces se repartía audiencias.

Preguntado si la actora trabajaba como abogada particular, respondió no que recuerde. Señala que atendía público en centro de la mujer, dupla sicosocial, trabajadora social y psicóloga atendían a usuarias de VIF.

2.- Don Patricio Andrés León Rojo, cédula de identidad N° 17.754.062-5, Abogado, quien legalmente juramentado expresa:

A la demandante, señala que conoce a Paulina, pero no a los representantes de la Municipalidad. Fue practicante a cargo a fines de 2017 a mediados 2018. En área familia en centro de la mujer de Villa Alemana.

En cuanto a la relación de la I. Municipalidad de Villa Alemana y el centro de la mujer, convenio laboral para funcionar. Ingreso a fines de enero a Villa Alemana, previo a ingreso estaban a cargo de provincia de Villa Alemana, y luego con causas de Olmué, era la única abogada del centro, siempre se manejó dupla de postulantes.

Conoce de la demanda, tutela y nulidad, tutela porque sufría de stress laboral, vio cuando trabaja. En su momento pidió semana administrativa, o no sé, pero por su cantidad de stress. Por incertidumbre de municipalidad, por el centro, irregularidades en los pagos, y los otros dos miembros del centro de la mujer.

Se solicitaban carpetas por área penal del centro de la mujer, fueron auditadas por coordinadora Yohana torres, esas carpetas era accesible para cualquier miembro del centro, multidisciplinario.

A la demandada indica que en el año 2017-2018 realizó su práctica, no conoce la fecha que dejó de prestar servicios.

Cuando hizo la práctica, estuvo en audiencias, en familia, civil, tramitaba causas asignadas al centro, las primeras 2 a 3 semanas lo acompañó a tribunales, y después se manejó de manera personal, debía realizar y subir escritos, atendía a usuarias, por orientación judicial respecto de sus casos e ingresos, administraba carpetas porque en lo penal no podían.



3.- Declara doña Loreto Andrea Smith Hidalgo, cédula de identidad N° 12.955.720-6, diseñadora gráfica, quien legalmente juramentada refiere:

A la demandante expresa que conoce a la actora, que ella fue derivada de Quilpué al centro de la mujer, era su representante, en su primera audiencia la cancelaron porque estaba en audiencia en Limache, en octubre de 2018.

La representó por el centro de la mujer, la derivaron de Quilpué, pues solo hay en Villa Alemana el centro de la mujer, atiende a toda la región de marga-marga. Solo ella veía su causa, esa causa duró 4 meses aproximadamente.

Luego una vez al mes a control de la psicóloga, y en mayo tenía que consultarle y estaba con permiso sin goce de sueldo, que se sentía bien con ella, sabe que dirigía el centro la señora Yohana.

A la demandada expresa que vive en Villa Alemana, hace unos 5 meses con su papá, antes en Quilpué, en Freire y en otro lugar más.

4.- Atesta doña Johana Macarena Torres Sepúlveda, cédula de identidad N° 17.493.806-7, trabajadora social, testigo presentada por ambas partes, quien legalmente juramentada expresa:

A la demandante señala que conoce Paulina Cánepa Beltrán, prestaban servicios, abogada y coordinadora, ella era la trabajadora del centro. Desde 2016 hasta junio de 2019.

Respecto a la relación entre la municipalidad y el centro de mujer, por el convenio de SERNAMEG y la municipalidad de Villa Alemana, la municipalidad ejecuta los dineros de SERNAMEG, para cumplir el convenio de colaboración, el servicio se pueda llevar a comunas de cobertura. La relación es administrativa y se hace con el dinero de SERNAMEG.

Expresa que ella está a cargo desde noviembre de 2017, antes estaba Natalia Pérez, las comunas que abarca, en Quilpué, Limache, Villa Alemana y Olmué, este año se eliminó Limache y Olmué.

El trabajo era con horarios, en proyecto de trabajo de SERNAMEG se establece horarios, en citas y trabajo administrativo. No se le exigía horario, tenía causas particulares, avisaba si tenía problemas para reagendar.

En su contrato señalaba que si tenía horario, las condiciones del convenio, actualmente no aparece en las condiciones en contratos, con condiciones como si



estuviesen contratadas por código del trabajo, luego desde el año 2018 ya no vienen en el convenio.

No se le pagaban cotizaciones, en contrato de trabajo, cuando se actualizó por cotizaciones de honorarios, sabían que tenían que hacerlo, en su momento era voluntario, hoy según opciones del SII.

Ella ingreso en 2016, compartieron como dupla, sin problemas, a veces observaba que postulantes tenían responsabilidad de cosas de ella. Luego la testigo asumió el cargo de coordinadora, para ejecutar programa, empezaron a tener diferencias, no se estaban cumpliendo los servicios de su contrato, destinando la mayor carga a los postulantes, de 30 audiencias ella realizaba 2 o 3, era muy dispar el trabajo y reclamos de usuarias, para comunicarse con ella y no había respuesta, o ellos pedían hacer algo para no tener tanto trabajo. En conversaciones entre ellas, previo a informes técnicos que ella hizo.

Como ella negaba los hechos, hizo un informe con aspectos técnicos del centro, y sus observaciones del proyecto. No hablaba de incumplimiento de horarios, si de la situación con los postulantes y cargas de trabajo, no respondía requerimientos de mujeres, casos de alto riesgo donde no realizó querellas.

Luego se desencadena en el término, que no siguiera en un futuro contrato, por observaciones técnicas. Ella asumió que tenía causas particulares y descuidó obligaciones de su contrato o servicio.

Expresa que no tuvieron problemas antes de esto, ni interpersonales, a pesar de diferencias profesionales.

A la pregunta por cuantos trabajan en el centro, hoy 11, más administrativo, con 2 abogados. Y cuando la actora estaba 1 abogada y dos postulantes. Aumentaron triada, 1 abogado, psicóloga, trabajadora social, desde septiembre de este año.

Sabe que la demandante demanda tutela laboral, leyó la demanda.

Preguntada si existió problema de pagos, señala que después que SERNAMEG libera el dinero, en enero, febrero, eran los meses de más espera, que en noviembre y octubre se preparaban, no pagaban enero febrero, en marzo se pagaba retroactiva.

Las funciones de paulina, lo que se pedía por el contrato, acompañar a mujeres VIF, denunciar o patrocinar, orientaciones, alimentos vulneración de



derechos, etc., participar en elaboración de proyectos y colaborar acciones de prevención, con delegación. Refiere que no existía delegación extraprogramática.

Señala que la DIDECO, al cual pertenece el centro de la mujer, colabora con el programa, requieren su firma para que el proceso administrativo se lleve a cabo en Recursos Humanos o Dirección de Asuntos Financieros (DAF), es la firma de DIDECO. No hay órdenes o supervisión.

Refiere que las actividades extraprogramáticas son invitaciones, que ella ha participado en gobiernos en terreno, presupuesto en terreno, asados. Eso no es obligatorio, y que los presupuestos participativos, son con un contrato distinto, y los asados eran voluntario, no hay imposición por dirección.

En cuanto al retraso de pagos, es un tema que ocurre siempre. Saben que el dinero está seguro pero que va a llegar en marzo. Preguntado si todos los años pasa, responde que depende de las transferencias de SERNAM, con vigencia de convenio.

Que se le pagaba las movilizaciones, cumplía con la audiencia y se devuelven, eso fue retroactivo, dependía de la disponibilidad presupuestaria. Rendía sumas importantes y comprobó que no asistía a las audiencias. Eso le consta porque tiene planilla con casos que entran, pues la testigo hacia trabajo estadístico. Revisó informe de postulantes, con audiencias de los postulantes y boletas de ella, cruzó información, de 30 iba a 3.

Preguntada si tenían libros, responde que de citas de usuarias, agenda, libro de actas, que ya no está, desde el 2013, donde apuntaban acuerdos técnicos, avances de causas, análisis de modelos de intervención y elementos administrativos.

Consultada si la testigo salió de vacaciones, responde que avisó que iba a salir, y reagendaba su trabajo. Y la subrogó Julia Pizarro, que Paulina en una oportunidad lo hizo, dejaba listo su trabajo y dejó a alguien a cargo por si habían emergencias, la subrogo por dos semanas.

A la demandada señala que el funcionamiento interno, era una triada Abogado, Psicólogo y Trabajador Social, se atendía a 3 usuarias diarias, citadas, definen un rango, y trabajo administrativo por cada caso. Acompañan a audiencias, colaboran con encargada de prevención, en ferias capacitación y charlas.



Que la relación interna de prestadores de servicio, la coordinación por acuerdo es lunes en la tarde, cuando están todos. Organización del trabajo se coordina con triadas. Ella participaba en reuniones.

Que el espacio físico, son oficinas donde atienden a quienes están presente y según agenda, van usando diversas oficinas, que no tienen un puesto físico para cada uno, no tienen esa posibilidad, como hay harta gente afuera, según disponibilidad se atiende, no citan a más de 4 mujeres en el mismo horario.

Preguntada por la estadística en el Centro de la Mujer, por audiencias, en total no, pero si de lo que observó lo asumían los postulantes, y como oyentes.

Preguntada si existe jefatura, refiere que no, ella no tiene cargo de jefatura, no decide, impone o exige nada, solo coordinar que el proyecto se cumpla, entregar condiciones para lograr objetivo. Y DIDECO tienen que ver con lo administrativo y es solo para firmar.

Para causas particulares, no pedía autorización, eso lo sabían porque conversaban o llegaban documentos a la dirección

Al Tribunal refiere que hubo 2 informes, en junio 2018 y abril 2019.

III.- Documental:

1) Set de 40 boletas de honorarios emitidas por la demandante, Paulina Cánepa Beltrán dirigidas a la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, con código de verificación del Servicio de Impuestos Internos, siendo la primera la N° 4 de fecha 21 de marzo de 2016 y la última N° 46 de fecha 25 de julio de 2019.

2) Set de Decretos Alcaldicios con su respectiva numeración y fecha, emitidos por la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, que contienen la aprobación de los contratos de la demandante doña Paulina Cánepa Beltrán:

- Decreto Alcaldicio N°492 de 22 de marzo de 2016 y su respectivo contrato a honorarios.

- Decreto Alcaldicio N°252 de 1 de marzo de 2017 y su respectivo contrato a honorarios.

- Decreto Alcaldicio N°364 de 14 de marzo de 2018 y su respectivo contrato a honorarios.

- Decreto Alcaldicio N°1047 de 14 de agosto de 2018 y su respectivo contrato a honorarios.



- Decreto Alcaldicio N°1294 de 12 de octubre de 2018 y su respectivo contrato a honorarios.

- Decreto Alcaldicio N°356 de 14 de marzo de 2019 y su respectivo contrato a honorarios.

3) Decreto Alcaldicio N°876 de 19 de junio de 2019 que pone termino al contrato de trabajo de doña Paulina Cánepa Beltrán

4) Fotocopia legalizada de Reuniones Técnicas (actas), oficina Centro de la Mujer, SERNAM Villa Alemana.

5) Prescripción de reposo laboral, emitido por la doctora Janeth Patricia Ávila Paredes, Médico Integral REDGESAM, Viña de Mar, de fecha 28 de marzo de 2018.

6) Factura electrónica N°2662, correspondiente a - consulta médica psiquiátrica en psiquiatría Clínica Viña del Mar Ltda., de fecha 28 de marzo de 2019.

7) Certificado Médico de fecha 11 de octubre de 2019, emitido por la doctora Janeth Patricia Ávila Paredes, consulta salud mental REDGESAM, Viña de Mar.

8) Certificado de atención psicológica, de fecha 20 de octubre de 2019, emitido por la psicóloga Alejandra González Skewes, Profesional de Psiquimédica.

9) Prescripción de ansiolíticos otorgado por el médico maxilofacial Joaquín Jaramillo Knopel, Hospital Gustavo Fricke Viña del Mar, de fecha 5 de octubre de 2018.

10) Bases de concurso para proveer los cargos de abogado, Psicólogo/a y Trabajador/a Social, para el Centro de la Mujer, Villa Alemana, septiembre 2019.

11) Bases de concurso para proveer los cargos de abogado, Psicólogo/a y Trabajador/a Social, para el Centro de la Mujer, Villa Alemana sección Limache, septiembre 2019.

12) Set de 8 fotografías de la demandante, realizando capacitaciones de Violencia Intrafamiliar y otras a temas de familia.

13) Credencial de participación como ministro de fe en Presupuestos Participativos año 2016.

14) Boleta de presupuesto participativo de septiembre año 2016.

IV.- Otros medios de prueba. Pericial:



Comparece doña **Paola María Elena Pérez Díaz**, cédula de identidad N° 12.450921-1, Psicóloga Clínica, quien legalmente juramentada refiere.

Que efectuó pericia a doña Paulina Cánepa para evaluar daño, realiza un psicodiagnostico, en 4 sesiones, analiza estructura de personalidad, mecanismo de defensa, por un evento traumático.

Detecta un alto grado de ansiedad, sobre lo normal, el cual afecta su vida cotidiana, la periciada no tiene ningún tipo de trastorno de personalidad.

Debido a situación específica de stress reiterado, por oposición a horas extras, renovación de contratos, lo que la llevo a sentirse desesperanzada.

Generó un daño psíquico, lo que coincide con la psicóloga.

Respecto a la metodología, señala que aplicó test, presenta sintomatología ansiosa. Por stress post traumático, aplicó test proyectivo, HTP, persona bajo la lluvia, familia TRO, Person, MMPI especifico 2 RF, nivel inferior de ítems, y test de gravedad de stress post traumático y sin, y entrevista forense en primera sesión. Y puntuó.

A la **demandante** señala que todos son validados en Chile y son los más utilizados.

Respecto a su informe con otros en la causa, refiere que hay similitudes, sintomatología de estado ansioso, cuando ella la evaluó estaba la misma sintomatología.

Paciente no debe tener trastorno de personalidad para no confundir los síntomas.

Respecto al daño, es emocional, físico y moral. En su comportamiento y en nivel de emociones. El evento, desde que trabaja en SERNAMEG, y empieza con problemas laborales, por hacer horas extras ir a lugares que no quería ir, carga era demasiada. A pesar de eficiencia, sobrepaso su capacidad laboral, tuvo problemas con su supervisora, cambios de contrato, inestabilidad laboral, generó afectación psíquica.

En cuanto a las características de la personalidad, explica que es organizada a nivel psíquico, estructura racional, le sirve para el manejo laboral y personal, sus problemas eran externos no internos.



A la demandada, consultada por su habilitación, expresa que es psicóloga clínica, titulada en 2009, ejerce desde 2010, saco su diplomado en psicología clínica.

Efectuó 4 sesiones, durante noviembre, en horario de 45 minutos a 1 hora, y espacios de sesiones, 1 vez por semana. Respecto a la aplicación de test proyectivos, no más de 20 minutos, más entrevista, de los hechos relatados. Evalúa los dichos, coherencia, etc. Relaciona con su pasado, presente, y proyectos futuros.

Se le consulta si se omite algún factor relevante, se le consulta si influye en el resultado, como por ejemplo cursar un magister. Refiere que tiene claro que estuvo en un magister pero ello no influye, lo encontró poco relevante. Por hacer un magister no debe sentirse disminuida, no es daño, quizás si a nivel ansioso.

Se le pregunta porque parte del informe se encuentra cotejado como textual de la demanda, señala que en antecedentes relevantes ella menciona eso de forma textual.

V.- Exhibición de documentos:

1) Libro de reuniones técnicas (actas) solo del periodo mayo a noviembre 2019.

2) Bases de concurso para proveer los cargos de abogado del Centro de la Mujer Villa Alemana, mes de septiembre de 2019,

Respecto al libro de control de asistencia llevado por la secretaría municipal, correspondiente al periodo desde el mes de enero de 2012 a noviembre de 2018, no se acompañó, indicando la demandada que no cuentan con dicho documento.

Siendo facultativo del tribunal ejercer la acreditación mediante presunción de las afirmaciones efectuadas al respecto del documento no ofrecido, según dispone el artículo 453 N°5 del Código del Trabajo, esta no se ejercerá por cuanto no se explicó que hecho buscaba acreditar con su contenido.

VI.- Oficios:

1) Oficio de la psicóloga Alejandra González Swekes.

2) Oficio de la doctora Janneth Ávila Paredes.

3) Oficio de A.F.P. Habitat.

4) Oficio de Fonasa.



SEXTO: Que en la audiencia de juicio se rindió la siguiente prueba por la parte demandada:

I.- Confesional: Se desiste en audiencia de la prueba solicitada.

II.- Testimonial:

1.- Don Juan Ignacio Rocco Tapia, cédula de identidad N° 9.027.893-2, contador auditor, conferida la promesa de rigor indica.

A la demandada expresa que trabaja en la municipalidad, es auditor jefe de la unidad de control, desde abril de 2019, antes director de recursos humanos, lleva trabajando desde abril 2010. No conoce a la demandante, pero sí de apellido

Por contratos de prestación de servicios, ella tuvo contrato de prestación de servicio en centro de la mujer en programa de municipio.

Su profesión es abogada, es un contrato de prestación de servicio por labores de convenio de municipalidad, tiene traspaso de dinero, contrata funcionarios prestadores de servicios, con el SERNAMEG.

Que se celebran convenios, cada un año, según los dineros

La relación con el municipio, para satisfacer necesidades de vecinos, entre organismos públicos, entre municipalidad y servicios, entrega dinero y contratan profesionales. Como se contratan a prestador de servicio de honorarios. Se solicita autorización, si hay fondos, se hace contrato y estipulan labores a desarrollar.

Se ven si ingresaron al municipio. Cuando ingresa el dinero.

La unidad o departamento que solicita la contratación de estos convenios los ve DIDECO, se relacionan porque las tareas las indica el organismo.

Paulina, como abogada tenía jefatura de abogada, es prestadora de servicios, ella tiene una coordinadora, ella informa y eso va al organismo patrocinante.

Preguntado por cuanto duraban los contratos, siempre con plazo fijo, por razón presupuestaria. En abril de este año había uno, ahora lo desconoce.

A las preguntas de la demandante sabe que desde 2016, hasta junio, desde abril dejo de ser el director de RRHH.

Trabajaba para municipio o SERNAMEG, en convenio estipula funciones, pero contrato lo efectúa la municipalidad. Prestador de servicio.



Respecto a la función, dice que no recibió algún reclamo por pago de trabajadores de SERNAMEG, no por forma escrita y por demora por remesas retardadas, no recuerda algún reclamo formal.

Unidad técnica coordina cometidos y ve los temas contractuales, DIDECO, no se les pagó cotizaciones, algunos lo realizaban de forma particular.

Paulina no estuvo sujeta a horario, solo desarrolla cometidos, contratos no venían con horarios. Los tipos de contrato no llevan horarios ni manejar libro de asistencia, según contraloría.

Venían algunas condiciones laborales de dicho contrato, vacaciones, no venían vacaciones.

Rol de la coordinadora centro de la mujer, que se cumplan los cometidos pactados en convenio, respetándolo.

No recibió algún informe de reclamo, solo informes por haber hecho bien los cometidos. No recibió reclamo en contra de Paulina.

2.- Doña Lorena Paola Osses Silva, cédula de identidad N°10.918.704-6, secretaria,

A la demandada responde que trabaja en el departamento jurídico del Municipio de Villa Alemana, lleva variadas tareas, entre ellas revisión de solicitud de contrato, desde 2008 a 2018, redactaba contratos a honorarios. Se refiere a contratos a honorarios.

La conoce porque tomo firma de sus contratos a honorarios. Ella tenía contrato a honorarios, cuando inició, es según el convenio las funciones y labores internas, la básica era atender a usuarias.

La demandante es abogada, ella prestaba servicios al inicio no en el edificio municipal, en 2016 estaba en Av. Valparaíso 498, estaba en un edificio contiguo, ahora están en Buenos Aires y esta SERNAMEG en calle Santiago. El convenio es coordinado por DIDECO.

Preguntado si existe jefatura de DIDECO con el centro de la mujer, no, el convenio da las instrucciones.

La duración de convenio, generalmente por un año, y anexo que dura 2 años o un poco más.



En mayo cesó funciones, y luego retornó un lapso menor, en junio. Consultado si la actora podía delegar funciones en tercero, señala que no establecía derivación de responsabilidad, ella debía atender.

Respecto al no pago, es práctica común que primeros meses se demora en llegar pago, pero todos aceptan las condiciones.

La señora Paulina sabía que se demoraba el pago por los trámites, requiere estar totalmente tramitado, firma alcalde, departamento jurídico, gobierno y decreto alcaldicio.

No conoce de reclamos al municipio o a otro organismo.

A la parte demandante responde que era una práctica de todos los años, sin recibir sus prestaciones, firmaba el contrato, y quedaba pendiente hasta estar totalmente firmado el convenio, no trabajaban gratis, porque en diversos convenios, se firmaban con la condición que al llegar el dinero se pagaba retroactivamente.

Es una práctica habitual que firmaban y después se pagaba, no se podía pagar con dineros municipales, solo una vez tramitado se podía pagar.

Refiere que Paulina era a honorarios y que firmó desde el 2016, un contrato de febrero a diciembre, y luego uno por año. No recuerda si firmó algún año más contratos.

No conoce de reclamos formales en su contra, solo comentarios.

Refiere que los contratos de SERNAMEG fijaban condiciones extras aparte de los horarios. Todo se basaba en el convenio, ello era diferente a los de honorarios, todo de convenio es distinto a los de municipalidad. Y en SERNAMEG, establecía beneficios laborales, como vacaciones, permisos, licencias médicas, y si fuera mujer pre y post natal. No había horario de trabajo establecido.

III.- Oficios:

Se incorporan el siguiente oficio:

- 1) Oficio de la Contraloría General de la República.

IV.- Exhibición de Documentos:

Se exhiben los siguientes documentos:

- 1) Formulario N° 22 Declaración Anual de Renta SII, que corresponde a las operaciones renta de los últimos 04 años.



2) Consolidado de consulta sobre boletas de honorarios emitidas por la demandante correspondiente a los años 2016, 2017, 2018 y 2019, éstos últimos extraídos desde el portal del servicio de impuestos internos.

3) Consulta Estado de Declaración de Renta de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, éstos últimos extraídos desde el portal del servicio de impuestos internos.

La parte demandante no exhibe el documento N° 2 de la Audiencia Preparatoria, estimando el tribunal que no existieron alegaciones relacionadas con la exhibición de dicho documento, es que no se ejercerá a su respecto la facultad contenida en el artículo 453 N°5 del Código del Trabajo.

SEPTIMO: Que las partes demandante y demandada, una vez concluida la incorporación de la prueba rendida, hicieron uso de la posibilidad de realizar alegatos de observación a la prueba y ambas mencionaron que con la prueba rendida habían justificado sus alegaciones y defensas respectivamente.

OCTAVO: Que de las alegaciones y testimonios de los testigos de ambas partes se menciona la existencia de un convenio entre SERNAMEG y la I. Municipalidad de Villa Alemana que fundamenta la relación entre las partes de este juicio.

NOVENO: Que el autor Jorge Bermúdez señala que los convenios interadministrativos son una manifestación del principio de colaboración para el cumplimiento de sus funciones, diferenciando esta institución de los contratos administrativos, señala que en los convenios interadministrativos concurre junto con la administración otro ente administrativo y no un administrado (*“Derecho Administrativo General”*, Bermúdez Soto, Jorge, LegalPublishing, 2017, pág. 236 y sgtes.). Así, el artículo 37 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado (LBGAE) dispone: “Los servicios públicos podrán encomendar la ejecución de acciones y entregar la administración de establecimientos o bienes de su propiedad, a las Municipalidades o a entidades de derecho privado, previa autorización otorgada por ley y mediante la celebración de contratos, en los cuales deberá asegurarse el cumplimiento de los objetivos del servicio y el debido resguardo del patrimonio del Estado.” El citado autor agrega que los convenios son una formula en virtud de la cual es posible llevar a la práctica los principios de unidad de actuación y coordinación, que estos se encuentran escasamente regulados en nuestro ordenamiento jurídico , lo que da lugar a un sinnúmero de



figuras semi-informales, denominadas convenios, contratos de agencia, protocolos de acuerdo, etc. Y los ámbitos de mayor utilidad de los convenios son los relativos a la distribución de competencias, evitando duplicidades, llenando lagunas y supliendo a otra administración pública (artículo 38 LBGAE).

Cabe señalar que la I. Municipalidad de Villa Alemana es un organismo público autónomo y descentralizado y el SERNAMEG es un órgano dependiente del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

DÉCIMO: Que de la prueba rendida por la demandada no se observa el ofrecimiento ni la incorporación al juicio, del o los convenios interadministrativos entre la I. Municipalidad de Villa Alemana y el SERNAMEG, para establecer el contenido preciso del mismo y poder determinar la efectividad de las aseveraciones de los **testigos Juan Ignacio Rocco y Lorena Osses Silva** que señalaron que las funciones y contenido de los contratos a honorarios eran definidos por los mencionados convenios interadministrativo, pero de los que este tribunal no pudo conocer al no incorporarse.

UNDÉCIMO: Como primer paso, se requiere resolver si concurre la existencia de una relación laboral entre las partes, para posteriormente comprobar la concurrencia de los presupuestos de las acciones interpuestas en este juicio, para así poder resolver conjuntamente la excepción de falta de legitimidad activa opuesta por la demandada.

La tesis sostenida por la demandante versa que en realidad la supuesta relación de carácter civil, por medio de la celebración de contratos de prestación de servicios (honorarios) y el pago de los mismos por medio de la emisión de boletas de honorarios, no era tal y que en los hechos constituiría una relación de carácter laboral, entre el actor de autos y la Municipalidad demandada.

A este respecto, se asila en lo consagrado en el artículo 7° del Código del Trabajo, sosteniendo que la relación contractual que lo unía con la demandada era de carácter laboral, por cuanto se cumplían todos y cada uno de los requisitos exigidos en la ley para considerar que se trataba de un contrato de trabajo conforme al artículo 10 del mismo cuerpo legal, atendido a que no se cumplirían los requisitos legales de la contratación a honorarios para el servicio público.

Que mediante el set de decretos alcaldicios incorporados por ambas partes, se logró establecer que se suscribieron **diversos contratos de honorarios** entre



doña Paulina Andrea Cánepa Beltrán y la I. Municipalidad de Villa Alemana, por las prestaciones de servicios correspondientes al periodo comprendido entre 22 de febrero de 2016 y 30 de abril de 2019, fecha en que presentó la renuncia a los servicios que prestaba. Suscribiendo un nuevo contrato de honorarios con fecha 13 de junio de 2019, habiendo iniciado sus servicios en este último periodo con fecha 01 de junio del mismo año hasta la fecha en que el demandado puso término a dicho acto, el día 30 de junio de 2019.

Que el pago de las **remuneraciones** eran cursadas y aprobadas por el municipio, aunque los fondos eran provistos de forma anual según aprobación y suscripción del respectivo convenio entre la I. Municipalidad con el SERNAMEG, el pago de los honorarios era entregado a la actora por la parte demandada, según atestó don **Juan Ignacio Rocco**.

En cuanto a la **dirección** de las labores efectuadas, manifestación del poder de mando y deber de obediencia, se explicó por los testigos **Juan Ignacio Rocco Tapia y Johana Macarena Torres Sepúlveda** que la demandada no entregaba órdenes directas a la actora mediante la DIDECO, si no que era a través de la coordinadora del programa doña Johana Torres. Pero sin embargo, según se aprecia de la lectura del set de 6 contratos de honorarios acompañados por ambas partes, que la I. Municipalidad intervenía visando por medio de la Dirección de Desarrollo Comunitario el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones impuestas, y ello es corroborado por los **testigos Patricio León y Rey Rivera**, este último refirió que la actora recibía órdenes de DIDECO, por lo que se ha de estar a la versión entregada por este último, por cuanto no tiene dependencia de ningún tipo a las partes, y durante su estadía como pasante pudo observar los hechos de los que da cuenta, siendo concordante con el contenido de control de las labores ejecutadas por la actora.

Respecto al cumplimiento de **jornada**, de la redacción del contrato de honorarios de fecha 15 de marzo de 2016, en su cláusula quinta, se observa que la actora inició sus labores con un horario establecido, que luego ello se modificó en los contratos posteriores. Que la testigo **Johana Torres Sepúlveda** indicó que la actora no estaba obligada a cumplir horarios, sin embargo el testigo **Rey Rivera**, quien desarrolló labores de postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial, dio cuenta de que en el periodo correspondiente a la época de sus



respectivas prácticas profesionales, la actora cumplía horario de trabajo. Lo cual resulta coincidente por lo demás con lo establecido en el contrato a honorarios celebrado en el año 2016, el cual contenía un horario definido.

En cuanto a las **funciones** encomendadas, según lo declarado por los testigos, estas eran determinadas por el convenio, sin embargo, como ya se mencionó, no se arribó dicha prueba para corroborar esas afirmaciones, por lo que del mérito de lo obrado en el presente juicio, las funciones ejecutadas sólo se contenían en el contrato de honorarios, las que consistían entre otras, atención de usuarias, patrocinio y representación en materias propias del centro de la mujer de Villa Alemana, actividades de intervención a mujeres, entre otras, el cual, si bien señalaba en dicho contrato a honorarios que correspondía a cometidos específicos, se demostró mediante la testimonial de **Patricio León, Rey Rivera y Loreto Smith**, que en realidad la actora **prestaba servicios de forma permanente y estable** en dicho cargo. De igual forma, los servicios de atención, entrevistas y demás labores administrativas del cargo, que no implicasen representación judicial o actividades en terreno, eran prestadas en el centro de la mujer, dependiente de la DIDECO de Villa Alemana, en las dependencias ubicadas en calle Maturana.

Que en cuanto a los servicios prestados, estos comprendían no solo la comuna correspondiente a la Municipalidad demandada, señalando los testigos León, Rivera, Smith y Torres, que prestaba servicios usuarias de las comunas aledañas de Quilpué, Limache y Olmué, sin embargo, el hecho que la prestación de servicios se extendiese a otras comunas, no obsta a que el vínculo entre las partes siempre estuvo determinado entre la Actora y la I. Municipalidad de Villa Alemana, a través de la DIDECO.

Que las circunstancias fácticas anteriormente verificadas permiten concluir que la actora de autos en los hechos estaba ligada a la demandada por un contrato de trabajo, pues a su respecto, se reúnen todos y cada uno de los requisitos para estimar que dicha relación contractual era de carácter laboral, pues prestaba servicios remunerados bajo subordinación y dependencia de forma permanente, la cual además tuvo una larga duración entre el 22 de enero de 2016 y el 31 de junio de 2019, fecha en que se comunicó el término de sus funciones.



DUODÉCIMO: Que, respecto a la tesis de la demandada, en cuanto a sostener que el demandado mantenía un régimen de contratación a honorarios, conforme lo establece la normativa administrativa que cita en su contestación, cabe tener presente que la demandante estaba sujeta a un horario establecido en que debía prestar sus funciones, además que dicha función debía ser cumplida en las dependencias del denominado “Centro de la Mujer”, dependiente de la DIDECO en la comuna de Villa Alemana, por lo demás estaba sujeta a la supervisión y control al momento de cursar el pago por sus servicios, mediante visación y modificación sus informes para ajustarlos a los términos convenidos.

DECIMOTERCERO: Que en los hechos no se verifican los requisitos contenidos en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, porque la demandante fue contratada y recontratada en forma ininterrumpida desde el 22 de enero de 2016 hasta el 30 de abril de 2019, no prestando servicios por el mes de mayo, pero sin embargo no se acreditó que prestase servicios para terceros en el periodo de mayo del año 2019, mes previo a la nueva contratación a honorarios desde el 01 de junio hasta la fecha de su despido el 30 de junio de 2019, por no renovación del contrato.

DECIMOCUARTO: Que, abona a la idea anterior lo resuelto por la Excm. Corte Suprema, conociendo recurso de unificación de jurisprudencia en los autos Rol 5699-2015, de fecha 19 de abril de 2016, quien sostuvo en sus considerandos decimosexto y decimoséptimo los siguientes fundamentos; *“...Que, en ese contexto, si una persona se incorpora a la dotación de una municipalidad bajo la modalidad contemplada en el artículo 4° de la Ley N° 18.883, pero en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que señala dicha norma -o que tampoco se desarrolla en las condiciones de temporalidad que indica-, sino que, más bien, satisfaciendo una exigencia que la ley reclama de un órgano público, como en este caso, un Municipio, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos ya señalados en el motivo anterior, y que conducen necesariamente a la conclusión que es de orden laboral. Lo anterior, porque dicho código constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato laboral, el trabajador queda al margen del*



Estatuto del ramo, en una situación de precariedad que no tiene justificación alguna.” “...Que, en consecuencia, la acertada interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo en relación con el artículo 4° de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho Código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, en la especie una Municipalidad, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírsele el estatuto especial que regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el Código del ramo; en otros términos, corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, las relaciones habidas entre aquéllos en la medida que dichas vinculaciones se desarrollen fuera del marco legal que establece –para el caso- el artículo 4° de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, y se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente. Tal es la correcta doctrina, que, además, ha mantenido esta Corte en el último tiempo, v. gr., Roles N°11.584-14, N°24.388-14 y N°23.647-14 (este último, contra el Servicio de Vivienda y Urbanismo).”

DECIMOQUINTO: Que desestimada la relación civil alegada por la demandada, conforme al principio de la primacía de la realidad, no estamos frente a una persona que ingresó al servicio público con carácter de titular o a contrata, y no se verifican los requisitos legales para establecer que se trataba de una contratación a honorarios, por tal razón la actora no es una funcionaria pública, y habiéndose verificado los requisitos del artículo 7° del Código Laboral, no cabe sino concluir que a la relación contractual que existió entre las partes deben aplicarse las normas del Código del Trabajo, por expreso mandato del artículo 1° del Código del ramo, fundamento coincidente con lo resuelto en el fallo citado en el considerando anterior.

DECIMOSEXTO: Que, en lo relativo al término de la relación laboral, este ocurrió 30 de junio de 2019, último día de prestación de los servicios, lo que concuerda con el tenor del último de los convenios a honorarios celebrados entre las partes de este pleito, de fecha 13 de junio de 2019, conforme a su cláusula cuarta.



Que no se logró establecer con la prueba rendida en juicio la afirmación realizada por la denunciante y actora de autos de que tres semanas antes de la fecha de término de prestación de servicios se dio aviso verbal de que no se renovarían. Quedando asentado que el término de la relación que ligó a las partes se produjo por no renovación, e incluso en el libelo reconoce que ello fue así, al punto de sostener que es la no renovación el hecho arbitrario cometido por la demandada.

DECIMOSEPTIMO: Que asentado la existencia de relación laboral, es menester analizar la procedencia de la denuncia de vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido alegada, para ello la actora refiere como indicios la existencia de tratamientos psicológicos y terapias en las cuales se encuentra asistiendo.

Refiere que se ha afectado mediante su despido su derecho a su integridad psíquica (artículo 19 N°1 de la Constitución Política), su derecho a la honra de la persona y su familia (artículo 19 N°4 CPR) en atención a que su despido fue condicionado a una supuesta baja de rendimiento realizada arbitrariamente, sin utilización de instrumento medible y tendencia a exigirle injustificadamente más trabajo.

A continuación reclama como infringido el derecho de indemnidad, pues a su juicio no solo se extiende a quienes inician una actividad fiscalizadora del estado, sino que también, como sería en este caso, a quienes reclaman por su legítimo derecho a tener el pago de sus remuneraciones al día y haber pedido igualdad de trato laboral.

De la **prueba testimonial** rendida tanto por la denunciante y la denunciada, no pudo establecerse la efectividad de existir actos vulneratorios con ocasión del despido de la actora, por cuanto el término de la relación laboral se produjo con fecha 30 de junio de 2019, debido a que el empleador decidió no renovar el convenio de honorarios suscrito entre las partes, por los servicios que debían prestarse, según el último convenio, entre el 01 y el 30 de junio de 2019. Ya que los testigos de la actora dieron cuenta del periodo correspondiente a 2016, 2017, y sólo la testigo Torres Sepúlveda se encontraba trabajando en dicha época en el centro de la mujer, pero sin embargo no estableció fecha ni dinámica de como



ocurrió el despido, sin que se indagara mayormente por las partes respecto al mismo

Que la garantía de **indemnidad** no se aprecia afectada, pues el no pago de las remuneraciones oportunamente en los meses de enero y febrero de cada año, fue una realidad que se ocasionó desde el 2016 hasta el 2019, y que no coincide con la fecha del despido de la actora, esto es, 30 de junio de 2019. Que la infracción a dicha garantía no fue reclamada durante el transcurso de la relación laboral en los momentos que se habrían producido, por lo que no son hechos que pueden concatenarse a la fecha del despido, requisito exigido por el legislador para la procedencia de la vulneración “con ocasión del despido”.

Que respecto a su **afectación psíquica y a la honra**, ha de analizarse la prueba pericial rendida en estrados, la perito se apreció poco estructurada en la incorporación de su pericial al juicio, indicó que detectó daño psicológico en la actora, al cual ella atribuye a las siguientes circunstancias: **“Debido a situación específica de stress reiterado, por oposición a horas extras, renovación de contratos, lo que la llevó a sentirse desesperanzada.** Detecta un alto grado de ansiedad, sobre lo normal, el cual afecta su vida cotidiana, la periciada no tiene ningún tipo de trastorno de personalidad.”

Pues bien, de los hechos asentados en juicio se estableció que el despido se produjo 30 de junio de 2019, frente a la no renovación del convenio a honorarios entre las partes, es decir, las situaciones que la actora alega que la aquejaban y que serían el origen del daño que padece, resultan ocasionarse por situaciones de stress laboral, oposición a realizar horas extras (cuestión que no se acreditó su existencia) y la incertidumbre en la renovación de contratos, lo que la llevó a sentirse desesperanzada. Todas estas circunstancias se desarrollaron previamente al despido, lo que es concordante incluso con la misma prueba acompañada por la actora, la cual de su análisis permite desprenderse su poca aptitud para generar convencimiento a este sentenciador, es así que mediante la documental señalada con los N° 5,6,7,8,9 y 10 correspondiente a documentos que dan cuenta, primero, de una atención del año 2018 por la médico cirujano Janeth Ávila que prescribió un reposo por 10 días en marzo de 2019 (documento N°5), luego una receta de prescripción médica de octubre de 2018 (documento N°10), en donde el cirujano dentista Joaquín Jaramillo, especialista maxilofacial, le receta



clotiazepam 10 mg, medicamento utilizado para el trastorno de ansiedad usado para los desórdenes temporomandibulares, lo cual no se conecta con algún hecho concreto de afectación indicado. Posteriormente acompaña certificado de la Médica Cirujana Ávila emitido a petición de la interesada (documento N°7), donde refiere que la acudió con cuadro clínico compatible con trastorno de adaptación y reacción al stress, iniciando un tratamiento farmacológico, pues bien, la doctora Janeth Ávila, rut: 24.626.421-K es médica cirujana, escapando de su área de expertiz el determinar trastornos psiquiátricos. Por lo que estos documentos han sido valorados negativamente.

Finalmente, el certificado de la Psicóloga Alejandra González, de fecha 20 de octubre de 2019 (documento N°9) atendió durante septiembre y octubre de 2019 a la denunciante, que según lo que estima observado, comenzó su sintomatología desde el año 2018, por volumen de trabajo y stress, concluye que estas situaciones ponen a la actora en situación de menoscabo, lo cual se agrava después de su despido, por sensación de incertidumbre, desesperanza y vulneración de derechos. Este documento lo que busca suplir es la declaración de la psicóloga que habría tratado a la paciente, quien fue ofrecida a declarar como testigo por la actora, pero que sin embargo no lo hizo, por lo que es valorado negativamente el documento, debido a que emite conclusiones respecto al daño sin explicar las metodologías utilizadas y sin posibilidad de que la contraria pueda contradecir los postulados de la profesional.

En conclusión, la prueba relativa a las vulneraciones alegadas resultan deficientes en su calidad y versan sobre periodos anteriores y posteriores a la época del despido, sin que pueda asociarse el daño supuestamente sufrido con hechos coetáneos o “con ocasión” del despido.

Que respecto a las alegaciones efectuadas por la denunciante, en cuanto a que fue despedida sin fundamento por ser condicionado a una baja de rendimiento, no existió prueba que corroborase dicha afirmación, por cuanto se estableció que el despido se produjo por no renovación del convenio a honorarios, y no por alguna comunicación previa que pusiese termino con anterioridad a la fecha estipulada.



DECIMOCTAVO: Que, habiéndose rechazado la denuncia de tutela de derechos fundamentales, cabe analizar los presupuesto de la acción subsidiaria de nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones.

Conforme a la prueba arribada a juicio no consta que se haya hecho entrega de carta de término de la relación contractual, indicando la causal, en el caso vencimiento del plazo convenido u otra causa diversa, no existe carta de desvinculación entregada por la demandada I. Municipalidad de Villa Alemana, tampoco aviso de no renovación del contrato aludido. Sin perjuicio de lo anterior y teniendo presente que se verificaron en la relación contractual habida entre las partes un vínculo de carácter laboral, bajo régimen de subordinación y dependencia, I. Municipalidad de Villa Alemana y la demandante celebraron 6 contratos a honorarios más un anexo, en forma continua, el primero con fecha 15 de Marzo de 2016 y el último en Junio de 2019, todos en similares términos, verificándose en los hechos una continuidad en las funciones cumplidas por la actora de autos, en idénticas condiciones y con el mismo cargo durante todo el periodo reclamado, con excepción del periodo de mayo de 2019, donde la actora renunció, en razón de lo que en la realidad fue un “permiso sin goce de sueldo”, pues no se acreditó que la actora prestase servicios a terceros ni que se hubiese efectuado pago por dicho mes, reincorporándose con un nuevo contrato, celebrado con fecha 13 de junio de 2019, por el periodo entre el 1 al 30 de junio del mismo año, y bajo similares condiciones.

DECIMONONO: Que al existir el término de la relación laboral, sin cumplir con las formalidades legales establecidas en el artículo 162 del Código del Trabajo, y teniendo presente lo razonado anteriormente, es que se acogerá la acción de despido injustificado, como también las prestaciones demandadas en el libelo principal. Para dichos efectos, y teniendo presente el monto de remuneración consignado en la **última boleta de honorarios** acompañada por la demandante y lo establecido en el considerando cuarto del convenio a honorarios de fecha 01 de agosto de 2016 -último celebrado entre las partes-, la remuneración que se considerará para efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, se tendrá como aquella la ascendente a **\$971.074.- (novecientos setenta y un mil setenta y cuatro pesos)**



VIGÉSIMO: En cuanto a la nulidad del despido por no pago de cotizaciones previsionales en el periodo de relación laboral, este sentenciado estima que no ha de concurrir en la especie la sanción señalada por la ley por la falta de convalidación del despido contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, por cuanto la relación laboral declarada se amparó bajo una fórmula legal, lo que basado en la presunción de legalidad de los actos de la administración, es sólo mediante esta sentencia judicial que ha de declararse la existencia de la relación laboral que rigió a las partes, considerando además las limitaciones propias de la administración municipal para efecto de poder convalidar el despido, y sumado a las retenciones honorarios de impuestos de las cuales la actora hizo uso en el periodo en que ambas partes estuvieron vinculadas laboralmente, no ha de prosperar dicha sanción.

Que este razonamiento es el mismo que ha establecido la Excma. Corte Suprema en autos de unificación de jurisprudencia **Rol N°13.367-2019**, de fecha 29 de noviembre de 2019, en el considerando cuarto de la sentencia de reemplazo señala:

“CUARTO: Que, no obstante fluir de los mismos antecedentes la mora previsional respecto del mes de julio y los días trabajados en el mes de agosto de 2018, no procede el castigo que contempla el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, pues al ampararse la contratación a honorarios en una fórmula contemplada por la ley, que aunque en los hechos no fue tal, sino una laboral, opera a favor de la parte demandada una razón que la exime de las consecuencias propias de dicha punición, ya que el basamento legal en el cual se celebraron los sucesivos contratos, les otorgaban una presunción de legalidad, debiendo considerarse, además, que en el contexto que se desarrolla el proceso, tal sanción se desnaturaliza, por cuanto los órganos públicos no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren de un pronunciamiento condenatorio.”

Línea jurisprudencial sostenida por el máximo tribunal de la nación en fallos Rol N° 18.848-2018 de 21 de septiembre de 2018, 8.318-14 de 2 de junio de 2015, 9.690-15 de 24 de marzo de 2016, 76.274-16 de 20 de diciembre de 2016, 191-17 de 25 de abril de 2017.



VIGÉSIMO PRIMERO: En cuanto a la probanza consistente en las comunicaciones remitidas por los organismos de previsión y seguridad social, esto es, respuestas de AFP Habitat y Fonasa respecto del informe de las cotizaciones de la actora durante el periodo entre marzo de 2016 a junio de 2019, prueba provocada por la parte demandante, si bien señala que las cotizaciones del periodo en controversia no están pagadas, ello no altera la realidad surgida de lo ya razonado respecto de la acción de nulidad del despido.

De igual forma, atendido lo razonado en el considerando anterior, no considerando que existió obligación de descontar el pago de las cotizaciones previsionales, se rechaza la excepción de devolución opuesta.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que analizada la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, se ha acreditado en autos que la demandante trabajó bajo subordinación y dependencia para la demandada I. Municipalidad de Villa Alemana, desde el 22 de febrero de 2016 hasta el 30 de junio de 2019. Relación laboral cuyo término se produjo sin dar cumplimiento a las formalidades legales establecidas en los artículos 162 y 177 del Código del Trabajo, razón por la que se accederá a la acción de despido injustificado.

Por lo demás, al no haberse invocado causal legal para poner término a la relación laboral, se accederá al recargo del 50% del monto correspondiente a la indemnización por años de servicios, según lo prescribe el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo.

VIGÉSIMO TERCERO: Que respecto al feriado legal y proporcional demandado, si bien se observa del convenio a honorarios que la demandada tenía entre los derechos que formaban parte de sus contratos del año 2016 derecho de la actora de exceptuarse de cumplir sus funciones por 15 días hábiles al cumplir un año y 6 días de excepción de cumplir con sus obligaciones durante el año, no se acompañó prueba alguna que acreditase que la demandante hubiese hecho uso de alguno los días de permisos pagados o feriados que allí se indicaban, por lo que no habiéndose acreditado su uso o su pago, ha de condenarse a dichos rubros demandado, acogiendo en la especie la excepción de prescripción opuesta por la demandada, limitándose por tanto al periodo de los 2 últimos años anteriores al término de la relación laboral.



VIGESIMO CUARTO: Que la restante prueba no analizada en forma pormenorizada en este fallo, no altera lo ya razonado precedentemente.

Por las anteriores consideraciones, y lo dispuesto en los artículos pertinentes de la ley N°18.834, N°18.695, artículos 1, 4,7, 9,10, 73, 162, 163,168, 172, 420, 446, 450, 452, 454 y siguientes y demás normas aplicables del Código del Trabajo.

SE RESUELVE:

I.- Que se **RECHAZA** la excepción de falta de legitimación activa y de devolución impetrada por la demandada

II.- Que se **RECHAZA** en todas sus partes, la demanda de tutela de derechos fundamentales

III.- Que **SE ACOGE** la demanda interpuesta por doña **PAULINA ANDREA CÁNEPA BELTRÁN**, abogada, en contra de la **I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA**, representada por don **JOSÉ SABAT MARCOS**, todos ya individualizados, sobre despido injustificado, nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales; **SÓLO EN CUANTO** se declara que existió relación laboral entre el día 22 de febrero de 2016 y el 30 de junio de 2019 entre las partes, lo que se produjo en forma continua durante todo el periodo señalado, que el despido de autos es injustificado por no haberse dado cumplimiento a los requisitos legales; y por ende se condena a la demandada ya singularizada al pago de las siguientes prestaciones e indemnizaciones;

1.- Indemnización sustitutiva del aviso previo por la suma de **\$971.074.-**

2.- Indemnización por años de servicio, por la suma de **\$2.913.222.-**

3.- Recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicios, conforme lo previene el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo equivalente a **\$1.456.511.-**

4.- Feriado legal equivalente a 42 días, por la suma de **\$1.259.504.-** Acogiendo en lo demás la excepción de prescripción alegada por la demandada.

IV.- Que las sumas ya señaladas deberán pagarse con los intereses y reajustes establecidos en los artículos 63 y 173 del Código del trabajo, según corresponda.

V.- Que no se condena en costas a la parte demandada por estimarse que ha tenido motivo plausible para litigar y no fue completamente vencida en juicio.



Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT: T-19-2019

RUC: 19-4-0215954-8

Sentencia dictada por don **Arturo Fernández Vargas**, Juez Suplente del Juzgado de Letras de Villa Alemana.

En Villa Alemana a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la resolución precedente.



XXPGNTXDZE

A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>